



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

## JUEZ SEXTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE CALI

Juez. **JULIÁN ANDRÉS VELASCO ALBÁN**

of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

adm06cali@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

REFERENCIA: **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**  
RADICADO: 76001-33-33-006-2023-00055-00  
DEMANDANTE: MIRYAM RAMÍREZ CIFUENTES Y OTROS  
DEMANDADO: DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI  
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

**GIOVANNI ANDRES ROMERO RODRIGUEZ**, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 6.229.104 de Cali, abogado titulado con Tarjeta Profesional No. 190.753 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado Judicial del demandado **DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI**, conforme al poder adjunto al proceso de la referencia, de manera atenta, descorro traslado contestando la demanda dentro de la oportunidad señalada, en los siguientes términos; así mismo solicito Reconocer Personería para actuar como Apoderado judicial en Representación del Distrito Especial de Santiago de Cali.

### CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

#### 1. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES

Solicita la parte demandante que se declare administrativamente y patrimonialmente responsable al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, “por los daños y perjuicios tanto materiales como inmateriales ocasionados a todos los demandantes: por los hechos ocurridos el día 27 de enero de 2021, con ocasión a la falta de mantenimiento en la vía pública, que originó la existencia de varios huecos, hundimientos en la vía pública, lo cual ha suscitado un daño a la salud física y psicológico que aun actualmente sufre la señora MIRYAM RAMIREZ CIFUENTES en su humanidad, ello a raíz de la falla en el servicio del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI y OTROS”.

Me opongo a la totalidad de las peticiones relacionadas en este acápite por cuanto carecen de fundamentos fácticos y jurídicos que hagan viable su prosperidad. La petición declaratoria parte del hecho de que existe responsabilidad y que la misma es atribuible al demandado; sin embargo, los elementos estructurales que permiten que confluya este tipo de declaración son inexistentes en el presente asunto.

En materia contenciosa administrativa, el Consejo de Estado ha desarrollado un grueso trabajo jurisprudencial tendiente a definir los elementos estructurales de la responsabilidad, que con apoyo doctrinal, ha consolidado en los siguientes: (i) el daño y la (ii) imputación (fáctica y jurídica). Sin ahondar al respecto sobre cada uno de estos elementos, debe tenerse en cuenta por las partes y por el juzgador que, atendiendo del régimen de responsabilidad aplicable para el caso, corresponde a la parte demandante probar que existe un daño y que el mismo es atribuible al Distrito Especial de Santiago de Cali. En este sentido, la labor procesal no puede ceñirse a la interposición de la demanda para trasladar el trabajo probatorio al juez o a la contraparte, es el demandante quién debe probar la estructuración causal que permite concluir la atribución de una eventual condena a el demandado.



Esta situación brilla por su ausencia, pues no existen fundamentos fácticos ni jurídicos que permitan la prosperidad de las pretensiones, lo que lleva a oponerse a cada una de las solicitudes realizadas en este acápite.

El Distrito Especial de Santiago de Cali no es responsable de los presuntos perjuicios causados a la señora MIRYAM RAMIREZ CIFUENTES como consecuencia del supuesto accidente, conforme a los hechos ocurridos el día 27 de enero de 2021, cuando manifiesta que salió caminando del inmueble ubicado en la carrera 31 No. 31<sup>a</sup> – 32 del barrio la fortaleza del Distrito Especial Santiago de Cali, en compañía de sus compañeras, que avanzó caminando sobre el andén hasta llegar a un poste, para posteriormente pasarse o caminar hacia la otra orilla del andén, cuando como consecuencia de un hueco profundo en la vía pública, pierde el equilibrio y motricidad de su cuerpo y se origina una caída de su propia altura.

No obra prueba alguna que permita esclarecer los hechos ni que dé cuenta de las circunstancias del accidente. La parte demandante realiza una narración de un hecho sin sustentarlo probatoriamente, configurándose una mera afirmación subjetiva.

Se logrará evidenciar en el transcurso del proceso que se presenta una CARENIA DE MATERIAL PROBATORIO que confirme y demuestre que las lesiones presentadas por la señora MIRYAM RAMIREZ CIFUENTES ocurrieron como consecuencia de la responsabilidad antijurídica del Distrito Especial de Santiago de Cali y que, en los hechos y pruebas planteadas, la única causa posible que emerge es una culpa exclusiva de la víctima.

Conforme a lo dicho, las pretensiones que enmarca en su demanda el actor son infundadas, no se le puede imponer esa responsabilidad al Distrito Especial de Santiago de Cali, teniendo como base situaciones que no gozan de un soporte probatorio.

Reclamaciones en torno al lucro cesante, perjuicios morales, daño a la salud, entre otros, no son del resorte de la Administración Distrital, no existe certeza respecto a los hechos que dieron origen a las lesiones de la señora MIRYAM RAMIREZ CIFUENTES, mucho menos las hay respecto a la participación o responsabilidad del Distrito Especial de Santiago de Cali, en el hecho generador de las mismas.

Las pretensiones solicitadas por la parte demandante además de ser infundadas y de no poder imponérselas al Distrito Especial de Santiago de Cali, se exceden y no gozan de soportes que les den viabilidad. Si bien el H. Consejo de Estado ha fijado en su jurisprudencia unos parámetros para la indemnización de perjuicios, lo cierto es que la aplicación de estos depende en gran medida de las pruebas con las cuales cuente el proceso respecto de las lesiones y las circunstancias en que se produjeron y como se observará el recaudo probatorio no da certeza.

A modo de clarificar y dar cuenta que esas pretensiones además de infundadas desbordan los parámetros que deben seguir en el evento de configurarse una responsabilidad directa y única, a continuación, se relaciona el cuadro que la legislación colombiana viene teniendo en cuenta para estos casos, establecidos en la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Al respecto dicho documento (Aprobado mediante Acta del 28 de agosto de 2014) determinó respecto al caso de lesiones:

REPARACION DEL DAÑO MORAL EN CASO DE LESIONES					
GRAVEDAD DE LA LESIÓN	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
	Víctima directa y relaciones afectivas conyugales y paterno-filiales	Relación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)	Relación afectiva del 3º de consanguinidad o civil	Relación afectiva del 4º de consanguinidad o civil.	Relaciones afectivas no familiares - terceros damnificados
	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.
Igual o superior al 50%	100	50	35	25	15
Igual o superior al 40% e inferior al 50%	80	40	28	20	12
Igual o superior al 30% e inferior al 40%	60	30	21	15	9
Igual o superior al 20% e inferior al 30%	40	20	14	10	6
Igual o superior al 10% e inferior al 20%	20	10	7	5	3
Igual o superior al 1% e inferior al 10%	10	5	3,5	2,5	1,5

Respecto el daño a la salud, se indicó que opera única y exclusivamente para la víctima directa y de acuerdo con la gravedad de la lesión, debidamente motivada y razonada:

REPARACION DEL DAÑO A LA SALUD REGLA GENERAL	
Gravedad de la lesión	Víctima directa
	S.M.L.M.V.
Igual o superior al 50%	100
Igual o superior al 40% e inferior al 50%	80
Igual o superior al 30% e inferior al 40%	60
Igual o superior al 20% e inferior al 30%	40
Igual o superior al 10% e inferior al 20%	20
Igual o superior al 1% e inferior al 10%	10

No obstante, en el presente caso, el demandante no ha indicado en qué consistió la gravedad de la lesión y/o sus consecuencias, por lo expuesto, no hay lugar a dicho reconocimiento.

## 2. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

**AL HECHO PRIMERO:** No me consta nada de lo manifestado por el apoderado de la parte actora mediante el presente hecho de la demanda y por lo tanto todo deberá probarse, en razón a que mi representada no tiene ningún contacto o relación con la parte actora, por lo que el Distrito no está en capacidad razonable de conocer tales detalles.

Sin embargo, en las pruebas aportadas se allegan los Registros Civiles, en donde se acredita el parentesco, cuyo valor probatorio deberá ser determinado por el Despacho Judicial.

**AL HECHO SEGUNDO:** Se evidencia la presentación de un Derecho de Petición ante la Administración Distrital; sin embargo, de este no se infiere que la responsabilidad debe recaer sobre el Distrito Especial de Santiago de Cali.

**AL HECHO TERCERO:** No me consta lo manifestado en el mencionado hecho; es una solicitud y manifestaciones de índole Político, que no son de resorte de la Administración Distrital.



**AL HECHO CUARTO:** No me consta el hecho en su integridad, pues ni obra prueba que indique que transitara como peatón por esa dirección, tampoco las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron lugar al presunto accidente

A mi procurada no le consta la afirmación relativa a las causas que según la demanda generaron el presunto evento; al respecto, hay que acotar que, de momento, no se han aportado las pruebas necesarias, útiles, pertinentes ni conducentes para atribuir que debido al estado de la vía, se presentó el evento que nos convoca. Las afirmaciones del demandante deberán ser probadas conforme lo señala el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Es menester recordarle al accionante que las valoraciones subjetivas no constituyen la narración precisa de los hechos, conforme con lo expuesto por el tratadista Hernán Fabio López Blanco:

*(...) En el aparte de los hechos, no cabe, dentro de una estricta técnica procesal, realizar apreciaciones subjetivas acerca de posibles formas de ocurrencia de lo que se quiere probar, como tampoco interpretaciones legales de ciertas disposiciones, errores éstos que se observan en numerosas demandas. Ciertamente, debe realizarse un escueto relato de los hechos tal como se afirma ocurrieron, tratando en lo posible, evitar todo matiz subjetivo en la narración, puesto debe tenerse siempre presente que lo que se va a hacer en el proceso es precisamente probar ante el juez como ocurrieron las circunstancias relatadas en el acápite de los hechos (...)¹*

**AL HECHO QUINTO:** No me consta, que la supuesta caída se haya originado con ocasión a la presencia de un supuesto hueco, ni como fue trasladada al Hospital; me atengo a lo que acredite con la documentación allegada y corroborada por el Despacho Judicial, son circunstancias de tiempo, modo y lugar que describen el supuesto accidente de tránsito; situaciones que en su momento se tendrán que probar por parte de la parte actora.

**AL HECHO SEXTO:** No me consta, me atengo a lo que acredite con la documentación allegada y corroborada por el Despacho Judicial. Pues este apoderado desconoce si la señora MIRYAM RAMIREZ CIFUENTES, con 65 años aproximadamente al momento de la ocurrencia del supuesto accidente, presentara algún antecedente médico que limitara su movimiento.

**AL HECHO SÉPTIMO:** No es un hecho, es un juicio que emite el demandante con relación al estado de la vía, lo cual carece de valor probatorio y simplemente no deja de ser una apreciación alejada de la realidad.

**AL HECHO OCTAVO:** Se evidencia la presentación de un Derecho de Petición ante la Administración Distrital; sin embargo, de este no se infiere que la responsabilidad debe recaer sobre el Distrito Especial de Santiago de Cali.

**AL HECHO NOVENO:** Se evidencia que, la secretaria de Gestión del Riesgo de emergencia y desastres del Distrito Especial de Santiago de Cali, realizó una visita técnica.

**AL HECHO DECIMO:** Se evidencia pronunciamiento del Distrito Especial de Santiago de Cali.

---

<sup>1</sup> López Blanco, Hernán F. Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano. Bogotá D.C.: Dupre Editore, 2005, Novena Edición



**AL HECHO ONCE:** Se evidencia pronunciamiento del Distrito Especial de Santiago de Cali; sin embargo, la parte demandante hace aseveraciones y juicios sin ningún respaldo probatorio, se hace alusión de un supuesto accidente, pero, no se advierte ninguna circunstancia de tiempo, modo y lugar.

**AL HECHO DOCE:** No es un hecho, es un juicio que emite el demandante con relación al estado de la vía, en donde pretende endilgarle la responsabilidad al Distrito Especial de Santiago de Cali, para justificar su actuar imprudente y negligente como peatón. En cuanto a la actividad económica, no obra prueba que determine cual era la misma, pues en los hechos se contradice el apoderado de la parte demandante al manifestar que era el UNICO sustenta de la familia, pero a su vez se infiere que tenía el cuidado total de su madre.

**AL HECHO TRECE:** No me consta que, la señora MIRYAM RAMIREZ CIFUENTES, de 65 años aproximadamente al momento del supuesto accidente fuera el eje central de una familia tan numerosa.

**AL HECHO CATORCE:** No es un hecho, es un juicio que emite el demandante con relación al estado de la vía, lo cual constituye una FALLA DEL SERVICIO, lo cual no es cierto y simplemente no deja de ser una apreciación alejada de la realidad, en donde pretende endilgarle la responsabilidad al Distrito Especial de Santiago de Cali, para justificar un actuar indebido que se llevó a cabo como peatón.

### **3. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA DE LA DEFENSA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**

El apoderado de los actores de la presente demanda plantea argumentos encaminados a endilgarle responsabilidad al Distrito Especial de Santiago de Cali, respecto del presunto accidente que, según los hechos narrados, ocurrió el día 27 de enero de 2021, cuando la señora MIRYAM RAMÍREZ CIFUENTES, salió caminando del inmueble ubicado en la carrera 31 No. 31ª – 32 del barrio la fortaleza del Distrito Especial Santiago de Cali, en compañía de sus compañeras, que avanzó caminando sobre el andén hasta llegar a un poste, para posteriormente pasarse o caminar hacia la otra orilla del andén, cuando como consecuencia de un hueco profundo en la vía pública, pierde el equilibrio y motricidad de su cuerpo y se origina una caída de su propia altura.

La demanda no describe en los hechos cómo fue el accidente, por dónde se desplazaba la señora MIRYAM RAMÍREZ CIFUENTES, indica de una manera muy general el sitio del presunto accidente, no determina en qué acera/andén se movilizaba, hacía dónde iba, cómo eran las condiciones climáticas de ese día, la iluminación, entre otros datos.

Del análisis efectuado a las circunstancias fácticas, jurídicas y probatorias obrantes en el escrito de la Demanda y sus pruebas, se evidencia la inexistencia de los elementos que permitan configurar responsabilidad patrimonial y administrativa a cargo del Distrito Especial de Santiago de Cali.

Lo descrito en la demanda solo tiene sustento en las aseveraciones que la misma demandante ha realizado ante quienes presuntamente le dieron asistencia médica, paramédicos del grupo de Bomberos, personal del centro médico, cuyo conocimiento de los hechos parte de la narración que la señora MIRYAM RAMÍREZ CIFUENTES, hicieron, manifestaciones de las cuales no se tiene acervo probatorio alguno, más allá de lo que ella misma expresa.





No existe certeza o evidencia que dé cuenta del lugar exacto donde ocurrió el presunto accidente mencionado por el demandante; el apoderado de la parte actora se limita a señalar una responsabilidad al Distrito Especial de Santiago de Cali y que como consecuencia de ella se le condene a pagar unas sumas de dinero por perjuicios materiales, lucro cesante y perjuicios morales, sin que se prueben las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon al mismo.

Observada la relación de hechos y pretensiones relacionadas por el demandante, no existen pruebas que determinen una responsabilidad del Distrito Especial de Santiago de Cali; existe plenamente una ausencia de material probatorio que involucre o determine de manera contundente una responsabilidad del Distrito Especial de Santiago de Cali, respecto del supuesto accidente ocurrido el día 27 de enero de 2021.

Respecto a lo relacionado como prueba denominada “fotografías”, no se contempla un valor probatorio para el mismo, en la medida que no hay certeza, ni obra prueba alguna del lugar de los hechos. Para esta parte de la litis no es clara la representación de la realidad de los hechos que se pretende demostrar con el mencionado documento representativo, pues genera la duda sobre la fecha de su toma, la ubicación, si fue en la dirección a que hace alusión el demandante y por supuesto, su contenido el cual puede ser alterado.

Respecto de la responsabilidad administrativa del Estado por daños causados a particulares, la Jurisprudencia tradicionalmente adoptada exige la presencia de tres (3) Elementos esenciales a saber: *a) Un daño causado a un bien jurídicamente tutelado; b) Una falla en el servicio por acción u omisión, retardo o irregularidad en su prestación; y c) El nexo causal entre uno y otro extremo.* Es decir, una relación de causalidad entre la falta o falla de la Administración y el daño, sin la cual, aún demostrada la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización. La esencialidad de esos tres elementos llega al extremo de que faltando uno de ellos no se configura la responsabilidad administrativa.

En nuestro sistema, corresponde al interesado en la indemnización, probar la falla del servicio, la existencia del daño con todas las características que lo hacen indemnizable y la relación de causalidad.

El problema de la responsabilidad del Estado debe resolverse con base en lo prescrito en el Artículo 90 de la Carta Política, según el cual el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades. Debe establecerse entonces, en cada caso, si existen los elementos previstos en esta disposición para que surja responsabilidad a cargo del Estado.

En Sentencia del 5 de octubre de 2011, la Subsección C, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, para resolver el asunto puesto a su conocimiento a través del recurso de alzada, interpretó el precitado texto Constitucional, señalando que<sup>2</sup>:

*"La responsabilidad del Estado consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política, se fundamenta en dos elementos, a saber: i) El daño antijurídico y, fi) la imputación del mismo a una autoridad en sentido lato o genérico.*

---

<sup>2</sup>Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia 1997-04160 de octubre 5 de 2011 C.P. Olga Mérida Valle de De La Hoz



*El inciso primero del texto constitucional antes señalado es del siguiente tenor literal:*

*"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.*

*"(...)"*

*Y es así, como la jurisprudencia de esta corporación lo ha entendido, diciendo lo siguiente:*

*Porque a términos del artículo 90 de la constitución política vigente, es más adecuado que el juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para que, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona jurídica de derecho público.*

*La objetivación del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión.*

*Por consiguiente, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa es lo relativo a la existencia del daño, por cuanto si en el proceso no se logra establecer la ocurrencia de este, se torna inútil cualquier otro análisis y juzgamiento.*

*Como lo ha señalado la Sala en ocasiones anteriores", el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa es la existencia del daño puesto que, si no es posible establecer la ocurrencia del mismo, se torna inútil cualquier otro juzgamiento que pueda hacerse en estos procesos.*

*Así las cosas, es claro que la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado —en materia contractual y extracontractual—, contenida en el artículo 90 ibídem, se soporta única y exclusivamente en los elementos antes referidos de daño antijurídico e imputación.*

*La Corte Constitucional refiriéndose a la posición asumida por la sección tercera de esta corporación, ha precisado los alcances del inciso primero artículo 90 de la Carta, en los siguientes términos:*

*"Son dos las condiciones indispensables para la procedencia de la declaración de la responsabilidad patrimonial con cargo del Estado y demás personas jurídicas de derecho público, a saber: el daño antijurídico y la imputabilidad del daño a alguna de ellas.*

*La noción de daño antijurídico es invariable cualquiera sea la clase (contractual o extracontractual) o el régimen de responsabilidad de que se trate; consistirá siempre en la lesión patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar."*

Como se ha expuesto y siguiendo los lineamientos precisados en la citada jurisprudencia, se impone iniciar por analizar en este caso la existencia del daño, como elemento principal, que abre paso al estudio de los demás elementos, si se responde de manera positiva a la pregunta acerca de su existencia.

#### FRENTE AL DAÑO ANTIJURÍDICO.

Ahora bien, en cuanto al concepto de daño, vale traer a cita lo señalado en la obra "EL DAÑO", compilación y extractos José N. Duque Gómez:



*"La certeza hace alusión a la verdad de su existencia, como concepto opuesto a todo lo que es hipotético, posible o eventual. Para que el daño sea indemnizable es requisito indispensable que sea cierto, verdadero e incuestionable."*

*"...Lo contrario a la certeza es la incertidumbre que se presenta cuando no hay seguridad sobre la real existencia del perjuicio que se invoca; se dice que el daño es incierto cuando los elementos de juicio de que dispone son insuficientes para sustentar su causación. En esta situación de incertidumbre el daño no es reparable y así lo tiene plenamente establecido nuestra jurisprudencia."*

El criterio antes expuesto, encuentra consonancia con lo establecido en el artículo 167 del CGP, norma general del Régimen Probatorio, según la cual, *"Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen."*

### FRENTE A LA IMPUTABILIDAD.

Se pretende endilgar las consecuencias del presunto accidente que según cuenta los hechos de la demanda ocurrieron el día 27 de enero de 2021 al Distrito Especial de Santiago de Cali, afirmando que *"la señora MIRYAM RAMÍREZ CIFUENTES, salió caminando del inmueble ubicado en la carrera 31 No. 31ª – 32 del barrio la fortaleza del Distrito Especial Santiago de Cali, en compañía de sus compañeras, que avanzo caminando sobre el andén hasta llegar a un poste, para posteriormente pasarse o caminar hacia la otra orilla del andén, cuando como consecuencia de un hueco profundo en la vía pública, pierde el equilibrio y motricidad de su cuerpo y se origina una caída de su propia altura"*.

Correspondía entonces a la parte demandante, demostrar en este punto, que existió la falla en el servicio, que esta falla fue la causa que dio lugar al daño antijurídico generado, que era un obstáculo insuperable para el peatón, aspecto que no se han detallado o especificado por parte del actor.

En relación con el tema, el Consejo de Estado en sentencia de octubre de 1.995, Expediente 9535, señaló<sup>3</sup>:

*"Por lo anterior, los hechos objeto del proceso deben manejarse dentro del régimen de la falla ordinaria o probada, en el cual al demandante le incumbe la demostración de todos los elementos que configuran la responsabilidad estatal."*

*"Y, toda vez que se imputa una omisión administrativa, la parte actora debe, además de probar la existencia del perjuicio y su relación de causalidad con la omisión de la cual él se deriva, acredita la existencia de la obligación legal o reglamentaria que imponía a la administración la realización de la conducta con la cual los perjuicios no se habrían producido. O, lo que es lo mismo, debía acreditar la existencia de la falla del servicio consistente en el cumplimiento de un deber y demostrar que dicha falla fue la causante del daño"*.

Se insiste que, la parte actora no allega material probatorio para probar la ocurrencia de los hechos, no se prueba la falla del servicio, y consecuentemente el nexo causal.

Lo manifestado en el libelo de la demanda no se soporta con las pruebas allegadas al plenario. Por todo esto, no hay prueba alguna, si quiera indiciaria, que permita realizar la atribución causal al Distrito Especial de Santiago de Cali, pues si no se configuró el argumento de que la parte demandada incidió en el resultado dañoso, desaparece la causa eficiente que para el juez determine la responsabilidad.

<sup>3</sup> Consejo de Estado en sentencia de octubre de 1.995, Expediente 9535





En virtud de lo anterior, es claro que ninguna de las pruebas que se han pretendido hacer valer en el presente plenario tiene como objeto lo antes señalado, lo que permite afirmar, que la falla en el servicio en esta instancia procesal no está probada.

Según los Artículos 164, 165 y 167 de la Sección Tercera, Régimen Probatorio, Título único Pruebas, Capítulo I del Código General del Proceso, establecen que:

*“Art. 164 – Necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegas al proceso.*

*Art. 165 – Medios de prueba. Sirven como pruebas la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.*

*El Juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio.*

*Art. 167 – Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.*

El anterior postulado deberá revisarse a la luz de las condiciones necesarias de pertinencia, conducencia y eficacia, para ostentar poder de convicción en relación con el hecho que se pretende probar. Estas condiciones pueden ser definidas así:

*“La pertinencia o relevancia consiste en que haya alguna relación entre el medio probatorio y el enunciado fáctico que se pretende someter a prueba, de manera que pueda influir en la decisión correspondiente...”*

*“En virtud de la conducencia, respecto de un caso determinado, el medio de prueba debe encontrarse explícitamente autorizado, o no estar excluido expresa o tácitamente... La conducencia de la prueba no es cuestión de hecho, sino de Derecho, al encontrarse contemplada en la ley o no estar dispuesta restricción para su uso procesal; ya que legalmente puede recibirse o practicarse. La conducencia se predica de la prueba y la pertinencia de los hechos material del proceso; así, una prueba puede ser pertinente pero el medio propuesto puede no ser idóneo. Un documento privado o un testimonio no son legalmente idóneos para demostrar la venta de un bien inmueble, pues la ley exige escritura pública para su celebración (Devis 1981: 340; Parra 2007: 153)*

*“Prueba eficaz es la que resulta efectivamente útil para llevar a la convicción del juez, derivada de criterios de valoración racionales...En suma, la eficacia de la prueba se establece efectuada su valoración o apreciación.”*

#### AUSENCIA DE PRUEBAS QUE DEMUESTREN LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR EN QUE SUCEDIERON LOS HECHOS.

Para partir de la base de atribuir responsabilidad, el apoderado de la parte demandante debió determinar desde la perspectiva causal qué conducta, acción u omisión, fue la que produjo el daño. Lo referido por el apoderado demandante son apreciaciones subjetivas de las que no hay prueba alguna en la medida que no está acreditadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar. La hipótesis de responsabilidad fue construida arbitrariamente por la parte demandante para fundamentar la legitimación por pasiva de la entidad demandada, omitiendo prueba alguna que permitiera atribuir a la administración el daño generado.



### CAUSAL EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD: CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

No obstante, se tiene que en el presente caso no existe la falla del servicio alegada, se invoca como causal de exoneración, en caso de posición en contrario, la culpa exclusiva de la víctima, como eximente de responsabilidad.

En efecto, una de las causas ajenas que se acepta como fenómeno liberador de la responsabilidad por ruptura del nexo causal es el hecho de la víctima, cuando es determinante, cuando influye en el resultado y por ello tiene implicaciones diferentes en el campo indemnizatorio. Su participación puede influir en el resultado, en proporción a su causalidad, para el caso que nos ocupa, la señora MIRYAM RAMÍREZ CIFUENTES, como peatón, desconociendo sus antecedentes médicos al ser una persona de tercera edad.

Es aquí donde debemos tener en cuenta la teoría de la causalidad adecuada, la cual sostiene que no todas las condiciones que concurren a un resultado adquieren la categoría de causas que originen la responsabilidad. Hay que separar, escoger, aquellos fenómenos, circunstancias, hechos que realmente fueron determinantes e influyeron en el resultado.

La duda sobre la falla del servicio y aún más la duda sobre si fue esa presunta falla la causante del daño, no permite configurar el nexo causal que se exige para predicar responsabilidad de la Administración Distrital.

Si el peatón hubiese adoptado una conducta prudente y cumpliendo las normas del Código Nacional de Tránsito, es seguro que no se hubiese presentado el accidente o los daños hubiesen sido menores. La sana lógica nos deja pensar que el lesionado no tuvo el suficiente cuidado y precaución al transitar por la vía el día del accidente.

Es conducente traer a cita las precisiones de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en Sentencia 1998-05970 de junio 9 de 2010<sup>4</sup>, señalándose lo siguiente:

*"2.2. El hecho exclusivo de la víctima como eximente de responsabilidad o causal excluyente de imputación.*

*"Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima constituyen diversos eventos que dan lugar a que devenga jurídicamente imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo. En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (1) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado, extremos en relación con los cuales la jurisprudencia de esta sección ha sostenido lo siguiente:*

*"En cuanto tiene que ver con (i) la irresistibilidad como elemento de la causa extraña, la misma consiste en la imposibilidad del obligado a determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para llevarla a cabo; en otros términos, el daño debe resultar inevitable para que pueda sostenerse la ocurrencia de una causa extraña, teniendo en cuenta que lo*

---

<sup>4</sup> Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en Sentencia 1998-05970 de junio 9 de 2010.



*irresistible o inevitable deben ser los efectos del fenómeno y no el fenómeno mismo —pues el demandado podría, en determinadas circunstancias, llegar a evitar o impedir los efectos dañinos del fenómeno, aunque este sea, en sí mismo, irresistible, caso de un terremoto o de un huracán (C.C., art. 64) algunos de cuyos efectos nocivos, en ciertos supuestos o bajo determinadas condiciones, podrían ser evitados —.*

*"Por lo demás, si bien la mera dificultad no puede constituirse en verdadera imposibilidad, ello tampoco debe conducir al entendimiento de acuerdo con el cual la imposibilidad siempre debe revestir un carácter sobrehumano; basta con que la misma, de acuerdo con la valoración que de ella efectúe el juez en el caso concreto, aparezca razonable, como lo indica la doctrina:*

*"La Imposibilidad de ejecución debe interpretarse de una manera humana y teniendo en cuenta todas las circunstancias: basta que la imposibilidad sea normalmente insuperable teniendo en cuenta las condiciones de la vía.*

*"En lo referente a la imprevisibilidad, suele entenderse por tal aquella circunstancia respecto de la cual 'no sea posible contemplar por anticipado su ocurrencia', toda vez que 'Prever', en el lenguaje usual, significa ver con anticipación', entendimiento de acuerdo con el cual el agente causante del daño solo podría invocar la configuración de la causa extraña cuando el hecho alegado no resulte imaginable antes de su ocurrencia, cuestión de suyo improbable si se tiene en cuenta que el demandado podría prefigurarse, aunque fuese de manera completamente eventual, la gran mayoría de eventos catalogables como causa extraña antes de su ocurrencia, más allá de que se sostenga que la imposibilidad de imaginar el hecho aluda a que el mismo jamás hubiera podido pasar por la mente del demandado o a que este deba prever la ocurrencia de las circunstancias que resulten de más o menos probable configuración o a que se entienda que lo imprevisible está relacionado con el conocimiento previo de un hecho de acaecimiento cierto.*

*"Sin embargo, el carácter imprevisible de la causa extraña también puede ser entendido como la condición de 'imprevisto' de la misma, esto es, de acontecimiento súbito o repentino, tal y como lo expresan tanto el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, como el artículo 64 del Código Civiles y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la cual imprevisible será cuando se trate de un acontecimiento súbito, sorpresivo, excepcional, de rara ocurrencia'. La recién referida acepción del vocablo 'imprevisible' evita la consecuencia a la cual conduce el entendimiento del mismo en el sentido de que se trata de aquello que no es imaginable con anticipación a su ocurrencia, toda vez que esta última comprensión conllevaría a que la causa extraña en realidad nunca operase, si se tiene en cuenta que prácticamente todos los sucesos que ocurren a diario ya han sido imaginados por el hombre.*

*"No está de más señalar, en cualquier caso, que la catalogación de un determinado fenómeno como imprevisible excluye, de suyo, la posibilidad de que en el supuesto concreto concorra la culpa del demandado, pues si este se encontraba en la obligación de prever la ocurrencia del acontecimiento al cual se pretende atribuir eficacia liberatoria de responsabilidad y además disponía de la posibilidad real y razonable de hacerlo, entonces los efectos dañinos del fenómeno correspondiente resultarán atribuibles a su comportamiento culposos y no al advenimiento del anotado suceso. Culpa e imprevisibilidad, por tanto, en un mismo supuesto fáctico, se excluyen tajantemente.*

*"Así pues, resulta mucho más razonable entender por imprevisible aquello que, pese a que pueda haber sido imaginado con anticipación, resulta súbito o repentino o aquello que no obstante la diligencia y cuidado que se tuvo para evitarlo, de todas maneras, acaeció con independencia de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia. En la dirección señalada marcha, por lo demás, la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha matizado la rigurosidad de las exigencias que, en punto a lo "inimaginable" de la causa extraña, había formulado en otras ocasiones:*



*"Y, por otra parte, en lo relacionado con (iii) la exterioridad de la causa extraña, si bien se ha señalado que dicho rasgo característico se contrae a determinar que aquella no puede ser imputable a la culpa del agente que causa el daño o que el evento correspondiente ha de ser externo o exterior a su actividad, quizás sea lo más acertado sostener que la referida exterioridad se concreta en que el acontecimiento y circunstancia que el demandado invoca como causa extraña debe resultarle ajeno jurídicamente, pues más allá de sostener que la causa extraña no debe poder imputarse a la culpa del agente resulta, hasta cierto punto, tautológico en la medida en que si hay culpa del citado agente mal podría predicarse la configuración al menos con efecto liberatorio pleno de causal de exoneración alguna, tampoco puede perderse de vista que existen supuestos en los cuales, a pesar de no existir culpa por parte del agente o del ente estatal demandado, tal consideración no es suficiente para eximirle de responsabilidad, como ocurre en los casos en los cuales el régimen de responsabilidad aplicable es de naturaleza objetiva, razón por la cual la exterioridad que se exige de la causa del daño para que pueda ser considerada extraña a la entidad demandada es una exterioridad jurídica, en el sentido de que ha de tratarse de un suceso o acaecimiento por el cual no tenga el deber jurídico de responder la accionada'.*

*"Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de aquella tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima.*

Por todas las anteriores consideraciones, es que se considera que la falla del servicio no está probada, no existe nexo causal eficiente y se desconocen las circunstancias que rodearon el accidente, siendo de otro lado clara la participación de la víctima como peatón.

Acerca de la necesidad de probar la falla del servicio, dentro del régimen del Artículo 90 de la Constitución Nacional, el Consejo de Estado, en reiterada Jurisprudencia, se ha referido a la necesidad de probar la falla del servicio por parte de la Administración. Es así, como en Sentencia de octubre 6 de 1.995, consejero Ponente, Dr. Carlos Betancur Jaramillo. Expediente 9535, dijo:

*"Comienza por señalar la Sala que el régimen de la responsabilidad presunta derivada del ejercicio de una actividad peligrosa por parte de la administración (Conducción de vehículos), en el cual solamente se requiere demostrar el daño y la relación causa, pudiendo la entidad demandada exonerarse sólo si demuestra la existencia de fuerza mayor o culpa de la víctima o el hecho exclusivo y determinante de un tercero, no es aplicable al caso sub-judice., perjuicio de una actividad estatal, en sí misma peligrosa desarrollada para provecho suyo y de la colectividad.*

*Aquí la responsabilidad que pretende imputarse a la administración no se deriva del ejercicio de una actividad desarrollada mediante un nexo instrumental peligroso. Todo lo contrario: ella se deriva (sic) una omisión de la administración.*

*Por lo anterior, los hechos objeto del proceso deben manejarse dentro del régimen de la falla ordinaria o probada, en el cual al demandante le incumbe la demostración de todos los elementos que configuran la responsabilidad estatal.*

*Y, toda vez que se imputa una omisión administrativa, la parte actora debe, además de probar la existencia del perjuicio y su relación de causalidad con la omisión de la cual él se*





*deriva, acreditar la existencia de la obligación legal o reglamentaria que imponía a la administración la realización de la conducta con la cual los perjuicios no se habrían producido. O, lo que es lo mismo, debía acreditar la existencia de la falla del servicio consistente en el incumplimiento de un deber y demostrar que dicha falta fue la causante del daño”.*

Y, en Sentencia del 5 de agosto de 1.994, Proceso No. 8487, con ponencia del Consejero Carlos Betancur Jaramillo, se dijo:

*“1.- En casos como el presente, en los cuales se imputa la responsabilidad a la administración por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, la determinación de si el daño causado al particular tiene el carácter de daño antijurídico, depende de acreditar que la conducta de la autoridad fue inadecuada. Si el daño que se imputa a ésta se deriva del incumplimiento de un deber que legalmente le corresponde, o de su cumplimiento inadecuado, la anti juridicidad del daño surgirá entonces aquí de dicha conducta inadecuada o lo que es lo mismo, de una FALLA EN EL SERVICIO.*

*La noción de la falla del servicio no desaparece, como lo ha señalado la Sala, de la responsabilidad estatal fundada en el citado artículo 90 de la Carta, cuando de ella se derive la responsabilidad que se imputa a la administración se constituye en un elemento que debe ser acreditado por el demandante. Así lo ha repetido esta misma Sala.*

*En otros términos, el daño es antijurídico no solo cuando la administración que lo causa actúa irregularmente, sino cuando esta conducta lesiva esté ajustada al ordenamiento.*

*En otras palabras, cuando se alega que la conducta irregular de la administración produjo el daño (la falla del servicio en el lenguaje corriente) tendrá que probarse esa irregularidad, salvedad hecha de los eventos en que esa falla se presume.*

*En ambas hipótesis ese primer presupuesto de la responsabilidad deberá gobernarse por las reglas de carga probatoria. Y cuando se afirma que ese daño se produjo sin falla o falta de la administración pero el que lo sufre no tenía porqué soportarlo, el acreedor, como es apenas lógico, deberá demostrar el daño y el porqué pese a ser legal la actuación de la administración, no tenía porqué sufrirlo.*

*En síntesis, la nueva constitución, a pesar de su amplitud en materia de responsabilidad, no la hizo exclusivamente objetiva no borró del ordenamiento la responsabilidad por falla del servicio. Las nociones de imputabilidad y de daño antijurídico así lo dan a entender” (Sentencia del 25 de febrero de 1.993, ponente, Carlos Betancur Jaramillo. Expediente 7742)”.*

Para que en estos casos pueda afirmarse que se presenta la falla del servicio, resulta necesario determinar el alcance de la obligación estatal que se denuncia como incumplida o como cumplida defectuosamente, debiendo orientarse esta determinación hacia la noción relativa de este concepto elaborada por la doctrina y adoptada por la jurisprudencia del H. Consejo de Estado.

Tal concepto implica, como lo ha dicho repetidamente el H. Consejo de Estado, que la responsabilidad de la Administración no puede resultar comprometida cada vez que un particular resulta lesionado en su “*vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades*”, para cuya protección están establecidas las autoridades de la República, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Constitución, pues el examen del cumplimiento adecuado de las obligaciones del Estado no puede hacerse con relación a la que se impone tal obligación, teniendo en cuenta sus recursos, sus capacidades y sus posibilidades y sin que pueda olvidarse que nadie, tampoco el Estado, puede ser obligado a lo imposible.





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

La noción de la falla del servicio tiene un carácter relativo, pudiendo el mismo hecho, según las circunstancias, ser reputado como culposo o como no culposo, en este sentido se pronunció el Consejo de Estado en Sentencia del 11 de octubre de 1990, Exp. 5737, donde expresó:

*“La Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el carácter de relativo que presenta la falla del servicio y ha señalado que para hablar de ella hay que tener en cuenta la realidad misma, el desarrollo, la amplitud y la cobertura de los servicios públicos y que ella no puede tener, la misma extensión en un país desarrollado que uno como el nuestro que apenas está en vía de desarrollo.*

*Es cierto que en los términos del Artículo 16 de la Constitución Política las autoridades están constituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes que a partir de ese texto que fundamente la responsabilidad del Estado, pero también lo es que esa responsabilidad no resulta automáticamente declarada cada que la determinación es afectada en tales bienes, pues la determinación de la falla que se presente en el cumplimiento de tal obligación que circunstancias de tiempo, modo y lugar, como si hubieran sucedido los hechos así como a los recursos con que contaba la Administración para prestar el servicio para que pueda deducir que la falla se presentó y que ella no tiene justificación alguna, todo dentro de la idea de que “nadie es obligado a lo imposible”.*

Sobre el mismo tema, en ponencia del mismo Consejero, doctor Carlos Betancur Jaramillo, expediente 10327, dijo: *“Por la actividad peligrosa ejercitada tanto por la administración como por los particulares, debe acudir a la falla probada del servicio según la cual quien debe sacar adelante sus pretensiones está en la obligación de demostrar que el demandado fue el causante del daño”*

De lo anteriormente expuesto se colige que, no se podrá condenar a la entidad pública que represento, al pago de los perjuicios materiales y morales, ya que como se demostrará no hubo participación de sus servidores ni mucho menos falla del servicio, razón por la cual muy respetuosamente solicito no acceder a las pretensiones de la parte demandante.

Es decir, cuando se alega que la conducta irregular de la administración produjo el daño (falla del servicio) tendrá que probarse esa irregularidad. En ambas hipótesis este primer presupuesto de la responsabilidad deberá gobernarse por las reglas de la carga probatoria. Y cuando se afirma que ese daño produjo una falta o falla de la administración pero que el que lo sufre no tenía por qué soportarlo pese a que sea legal la actuación de la administración no tenía por qué sufrirlo.

Se colige de lo expuesto que definitivamente, no es el DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI, el llamado a responder por los daños y perjuicios invocados por el actor.

#### REFERENCIAS JURISPRUDENCIALES:

*Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ, sentencia del 25 de agosto de 2011 radicación número: 66001-23-31-000- 1997-03870-01 (17613).*

*“Caminar por las calles y andenes conlleva riesgos, de mayor o menor entidad y que la administración de tales peligros, cuando las vías públicas se encuentren en las condiciones que razonablemente cabe esperar que se hallen en una geografía caracterizada por su sinuosidad – como la colombiana –, teniendo en cuenta que las administraciones públicas han de realizar ingentes esfuerzos por atender siempre acuciantes necesidades – no solo en cuanto atañe al mantenimiento de calzadas y andenes – con base en una disponibilidad de recursos también habitualmente limitada, es sabido que la administración de tales riesgos –*



*se insiste- conlleva para los ciudadanos la asunción de unas mínimas cargas de diligencia, de deberes objetivos de cuidado orientados a evitar el desencadenamiento de los percances que ordinaria y regularmente pueden producirse en la cotidiana circulación a lo largo de la vía pública, en especial si reviste características como las inherentes a aquella en la cual sufrió una caída la víctima directa del daño en el asunto sub examine”*

La referencia anterior es más que apropiada, resume en gran parte lo ocurrido. Los ciudadanos deben atender las recomendaciones de la administración, de la normatividad, de la coherencia y no apuntar a actuaciones que pongan en peligro su integridad.

En este orden de ideas, carece de sustento lo afirmado por el apoderado del demandante, en cuanto señala que el hecho implica una falla en la prestación del servicio por parte de la administración.

Por eso valga repetirlo, se considera que el daño es un elemento indispensable para la existencia de la responsabilidad, pero cuya sola presencia no convierte de suyo a quien lo sufre en acreedor de una indemnización.

#### **4. EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**

Las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E., tienen la obligación de mantener adecuadas las condiciones del sistema de alcantarillado de la ciudad, puesto que ésta es subsidiada producto de una erogación que mensualmente la ciudadanía paga el recibo de los servicios públicos”. EMCALI E.I.C.E. E.S.P., como entidad descentralizada del orden Municipal, constituida inicialmente como un Establecimiento público, mediante Acuerdo No. 50 de 1961, y posteriormente transformada en una Empresa Industrial y Comercial del Estado, según Acuerdo 014 de Diciembre 26 de 1996, modificado posteriormente por el Acuerdo 034 de Enero 15 de 1999, siendo el objeto social de la empresa, la prestación de servicios públicos domiciliarios contemplados en las leyes 142 y 143 de 1994.

Mal podría entonces atribuírsele al Distrito de Santiago de Cali, responsabilidad por los hechos narrados en la demanda, teniendo en cuenta que la secretaría de Infraestructura manifestó que requería del concepto de EMCALI.

Cabe concluir que el cuidado, mantenimiento y reparación de sumideros y alcantarillas es competencia exclusiva de las Empresas Municipales de Cali EICE ESP. Hecho este pues que colocaría a la Entidad de servicio público como directa responsable en los hechos narrados por la parte actora, es consecuencia es procedente la aplicación de la legitimación en la causa por pasiva para la Administración Municipal.

EMCALI EICE ESP, cuenta con personería jurídica que le permite ser sujeto de derechos y obligaciones y de esta manera responder patrimonialmente por los daños ocasionados en los que pudiere resultar condenada, además cuenta con autonomía presupuestal, financiera y administrativa.



## 5. EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD

### CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA

Se desconocen las circunstancias de tiempo, modo y lugar que según la demanda ilustran el presunto accidente en donde se lesiono la señora MIRYAM RAMIREZ CIFUENTES, por lo que le resulto conveniente endilgar responsabilidad al Distrito Especial de Santiago de Cali; olvidando que al transitar en una vía como peatón se debe tener medidas de prevención, seguridad, la víctima omite normas de cuidado que deben ser más estrictas y mejor atendidas, teniendo en cuenta su edad.

Es menester traer a cita la Ley 769 de 2002, “por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”, que prevé en sus artículos 58, lo siguiente:

LEY 769 DE 2002 (agosto 6)

“Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.

#### CAPITULO V

ARTÍCULO 58. PROHIBICIONES A LOS PEATONES. (Artículo modificado por el artículo 8 de la Ley 1811 de 21 de octubre de 2016). Los peatones no podrán:

1. Llevar, sin las debidas precauciones, elementos que puedan afectar el tránsito de otros peatones o actores de la vía.
2. Cruzar por sitios no permitidos o transitar sobre el guardavía del ferrocarril.
3. Remolcarse de vehículos en movimiento.
4. Actuar de manera que ponga en peligro su integridad física.
5. Cruzar la vía atravesando el tráfico vehicular en lugares en donde existen pasos peatonales.
6. Ocupar la zona de seguridad y protección de la vía férrea, la cual se establece a una distancia no menor de doce (12) metros a lado y lado del eje de la vía férrea.

Subirse o bajarse de los vehículos, estando estos en movimiento, cualquiera que sea la operación o maniobra que estén realizando

7. Transitar por los túneles, puentes y viaductos de las vías férreas.

PARÁGRAFO 1. Además de las prohibiciones generales a los peatones, en relación con el STTMP, estos no deben ocupar la zona de seguridad y corredores de tránsito de los vehículos del STTMP, fuera de los lugares expresamente autorizados y habilitados para ello.

PARÁGRAFO 2. Los peatones que queden incurso en las anteriores prohibiciones se harán acreedores a una multa de un salario mínimo legal diario vigente, sin perjuicio de las demás acciones de carácter civil, penal y de policía que se deriven de su responsabilidad y conducta.

Dentro del perímetro urbano, el cruce debe hacerse solo por las zonas autorizadas, como los puentes peatonales, los pasos peatonales y las bocacalles.



Considero oportuno, citar algunos apartes de la sentencia del trece de abril de dos mil diez (2010), proferida por el concejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejera Ponente: Dra. Ruth Stella Correa, expediente 2500023200019980668 -01 (aclaración de voto):

*“Ahora bien, en relación con la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad, es importante definir el contenido y alcance de la misma, con miras a establecer que elementos y características deben estar acreditados a efectos de que se rompa el nexo de imputación con el estado de manera total o parcial. Lo anterior, toda vez que en materia de responsabilidad de la administración pública derivada de redes eléctricas puede tener, en un gran número de casos, una participación en los hechos productores del resultado, condición que debe ser valorada para efectos de configurar y delimitar la circunstancia exonerativas.*

*“Desde la perspectiva general, es claro que el hecho de la víctima a efectos de que sea valorado como causal eximente de responsabilidad no necesariamente debe revestir, en relación con el desmandado, las condiciones de irresistibilidad e imprevisibilidad de la fuerza mayor, como quiera que no exista disposición jurídica que radique en cabeza del tercero a quien se le imputa del daño la obligación de precaver los hechos de la víctima y, más aún, de evitarlos.*

*“En efecto, el demandado solo se encuentra obligado a evitar los daños ‘padecidos por la víctima en aquellos eventos en que se encuentre en posición de garante 1(7), frente a aquélla, casos en loscuales, a efectos de enervar la acción indemnizatoria debe acreditar la imprevisibilidad e irresistibilidad de la conducta que origina el daño, con miras a exonerarse de la responsabilidad que se le endilga. A contrarios sensu, en las demás circunstancias del comportamiento de la propia persona que sufrió el daño.*

*“El principio de confianza conlleva implícito la tranquilidad que tienen las personas que integran lasociedad, de que el Estado prestará adecuadamente sus servicios públicos, por lo que, no cualquier tipo de participación de la víctima, en una actividad riesgosa, reviste la estatus necesario para excluir la responsabilidad de la administración.*

*“En síntesis, no se requiere de configurar la culpa exclusiva de la víctima que el presunto responsable acredite que la conducta de aquélla fue imprevisible e irresistible, sino que lo relevante es acreditar que el comportamiento de la persona lesionada o afectada fue decisivo, determinante y exclusivo en la producción del daño; incluso, una participación parcial de la víctima en los hechos en modo alguno determina la producción del daño, sino que podría de manera eventual conducir a estructurar unaconcausa y, por lo tanto, a reconocer una proporcionalidad en la materialización del mismo y en su superación. (“negritas y cursivas del original – subrayado adicional)...”*

## 6. PRUEBAS

Solicito respetuosamente se tengan como pruebas las presentadas y pedidas por la parte actora, con la posibilidad de ser controvertidas en el transcurso del proceso.

## 7. INTERROGATORIO DE PARTE

Le solicito señor juez citar a la señora MIRYAM RAMIREZ CIFUENTES para efectuarse interrogatorio de parte, sobre los hechos de la demanda.



## 8. FACULTAD PARA CONTRAINTERROGAR

Le solicito señor Juez me autorice contrainterrogar a los testigos de la parte demandante en las audiencias respectivas, para la recepción de testimonios que sean decretados por su Despacho.

## 9. CONTRADICCIÓN DICTAMEN PERICIAL

*“El Artículo 228 del Código General del Proceso establece que la parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones”; por lo anterior el Distrito Especial de Santiago de Cali, se opone a lo denominado por la parte demandante como “dictamen pericial” por falta de requisitos establecidos en la norma; además de que el perito es topógrafo, y no puede dictaminar sobre aspectos que no sean de su experticia como tal.*

Por lo que solicito, citar al Ingeniero Civil y Topógrafo James Bliner Quijano Muñoz identificado con cedula No. 16 788 650, quien fue contratado por el apoderado de la parte demandante.

## 10.LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

En escrito separado, con el fin, se hagan parte en el presente proceso, me permito formular Llamamiento en Garantía a la Compañía **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA** y sus coasegurador **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A., SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. , HDI SEGUROS S.A** quienes aparecen en la póliza de Responsabilidad Civil N° 420 - 80 - 994000000181 con vigencia del 23/06/2020 hasta el 19/05/2021 con una participación cada una del 28.00%, 20.00%, 10.00 % y 10.00%, respectivamente.

## 11.ANEXOS

1. Poder a mi conferido por la Directora Jurídica del Distrito Especial de Santiago de Cali, quien cuenta con la respectiva autorización para ello por parte del Señor Alcalde.
2. Copia del Acta de Posesión y Decreto de nombramiento de la directora de Oficina de la Dirección Jurídica de la Alcaldía de Santiago de Cali.
3. Escrito de Llamamiento en Garantía a las Compañías **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA** y sus coasegurador **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A., SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. , HDI SEGUROS S.A** y sus anexos.
4. Copia de certificado de existencia y representación legal de las Compañías **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA** y sus coasegurador **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A., SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. , HDI SEGUROS S.A** expedidas por la Cámara de Comercio, donde se identifica en cada una su domicilio para efectos de notificación.





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

## 12.NOTIFICACIONES

- Se informa que el correo electrónico exclusivo para recibir notificaciones judiciales por parte del Distrito Especial de Santiago de Cali, conforme a lo establecido en el art. 197 del CPACA, es [notificacionesjudiciales@cali.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@cali.gov.co)
- El suscrito como apoderado del Distrito Especial de Santiago de Cali, las recibiré en la secretaria de Infraestructura Municipal ubicada en el CAM, Torre Alcaldía, Piso 12. Correo electrónico [grabogados@hotmail.com](mailto:grabogados@hotmail.com) celular 320 - 6820613
- Por instrucciones del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública de la entidad, las actuaciones dentro del presente proceso se remitirán a través del correo electrónico de la entidad: [ejerciciodefensa01@cali.gov.co](mailto:ejerciciodefensa01@cali.gov.co)
- Las compañías objeto del llamado y su representante legal, las recibirán en las direcciones indicadas en el escrito de llamamiento en garantía, según los certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio.

Del señor Juez Administrativo

Atentamente,

GIOVANNI ANDRES ROMERO RODRIGUEZ  
C.C. No. 6.229.104 de Cali (V)  
T.P. No. 190.753 del C.S. de la Judicatura.